

289.000 pensionistas alicantinos pagarán entre 8 y 18 euros al mes por sus fármacos



Ana Mato, ayer a su llegada al Consejo Interterritorial de Salud. :: EFE

LA REFORMA SANITARIA

1 Copago farmacéutico para los pensionistas (salvo los que tienen pensión contributiva) y elevación del copago del 40 al 50% para rentas superiores a los 18.000 euros.

2 Turismo sanitario: El Ministerio quiere cambiar la legislación para evitar que haya extranjeros que se empaquen en España para poder recibir asistencia gratuita en sus países que luego se carga a la sanidad española.

3 Cartera de servicios: Se elaborará una cartera básica común para todo el Estado, y se regularán carteras suplementarias para prestaciones de dispensación ambulatoria o de servicios accesorios. Aún debe concretarse la medida.

4 Recursos humanos: Se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales. Se quiere facilitar la movilidad de los trabajadores sanitarios.

5 Central de compras: El Ministerio coordinará la compra centralizada de vacunas, fármacos y productos para todas las comunidades autónomas.

6 Fondo de Garantía Asistencial: El objetivo es compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a ciudadanos de otras regiones. El problema afecta más a las comunidades turísticas.

Los trabajadores en activo deberán abonar más según su renta, y quedan exentos los parados sin ayudas y los que perciben una pensión no contributiva

:: E. B./C. M. A.

ALICANTE. Los pensionistas deberán rascarse el bolsillo si quieren medicinas. En el plazo de dos meses, más de 289.000 alicantinos tendrán que pagar el 10% de sus fármacos. Es decir, que con una pensión media de 721 euros, una de las más bajas de España, tendrán que desembolsar entre 8 y 18 euros al mes.

El copago farmacéutico fue acordado ayer, entre otras actuaciones, por el Consejo Interterritorial de Salud. Unas medidas con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros. En el caso de la Comunitat se quieren recaudar 700 millones y el conseller de Sanidad, Luis Rosado, está más que a favor en su aplicación para hacer sostenible el sistema sanitario.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, tras una reunión que se prolongó seis horas, explicó que los pensionistas con rentas por debajo de 18.000 euros al año pagarán un máximo de 8 euros mensuales, y de 18 euros para los que superen esta cantidad. «Los ocho euros al mes supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que fueran todos los días a la farmacia», argumentó la titular, quien, no obstante, pidió disculpas a este colectivo.

Con esta medida, según insistió, no habrá copago sanitario y respecto al abono de los fármacos en función de la renta, matizó que no tiene un afán recaudatorio sino «disuasorio». Mato se refirió así al coste que supondrá para los ciudadanos activos el acceder a los fármacos. Aquellos que tengan una renta inferior a 18.000 euros y las familias numerosas seguirán pagando el 40% de las medicinas -al igual que ocurre ahora-, mientras que los que tengan un sueldo superior

abonarán el 50% y se elevará al 60% para los que cuentan con rentas superiores a los 100.000 euros anuales. Así, del copago quedarán exentos los que perciben pensiones no contributivas, los que reciben una renta de inserción y los parados sin prestación por desempleo.

En este último caso -desempleados de larga duración y sin ayudas- hay más de 85.000 personas en la provincia que se encuentran en esta situación. Ahora bien, según los datos facilitados por CC OO, de los más de 120.000 alicantinos que cobran alguna prestación, un 50% tienen una asignación inferior a los 500 euros.

La justificación del copago viene determinada por la eleva adquisición de fármacos. España, según el Ministerio de Sanidad, es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y el pasado año se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones. En la Comunitat Valenciana se ha comprobado que el 4% de la población consume el 46% de los fármacos dispensados, siendo las personas mayores de 65 años quienes hacen un uso más frecuente de las recetas.

Para el conseller de Sanidad, con la reunión de ayer se ha «reafirmado» la voluntad de que «el modelo sea gratuito, universal y se mantenga en el tiempo». A su juicio, la adquisición de recetas según la renta beneficiará a pensionistas, enfermos crónicos y desempleados y es «más justo y equitativo, ya que pagan más los que más tienen».

No opinan igual sindicatos, partidos políticos de la oposición y asociaciones de consumidores como Asgeco Confederación y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que consideran que la propuesta «afectará y penalizará a los ciudadanos más vulnerables y acentuará la desigualdad».

Desde la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que es «la peor fórmula» posible para ahorrar. «Hay medidas diferentes a las que plantea el Gobierno y si el PSOE tiene que elegir entre que los pensionis-

Así, el Gobierno además de atender a una «demanda social», conseguirá ahorrar, aproximadamente, teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011, unos 1.000 millones de euros.

Esta decisión, explicó, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que «se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros». Como ejemplo, denunció que «hay personas que viene a

España, se empadronan y obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España».

Además, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que quienes viene garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España. Se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, para que España pueda facturar de manera rápida y directa al país de origen.

El Gobierno endurece la ley para evitar el turismo sanitario y ahorrar mil millones

:: E. P.

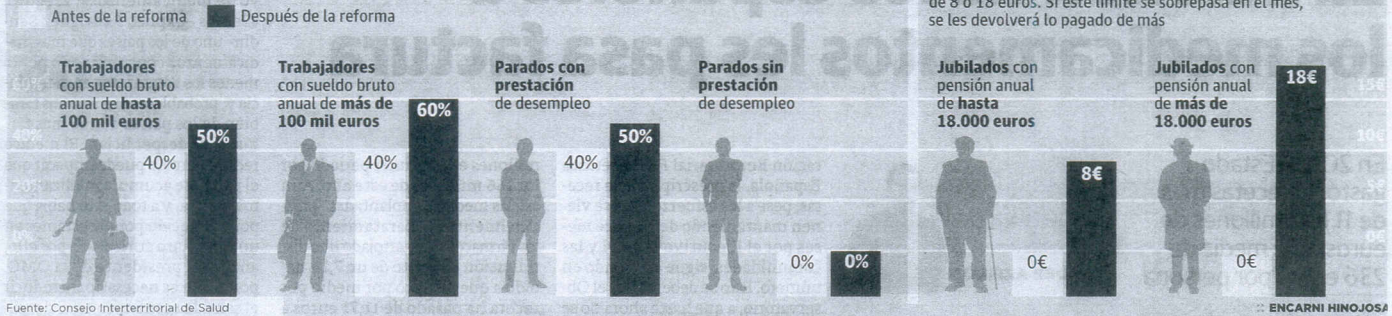
MADRID. La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció ayer que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades autónomas incorporar al Derecho español un artículo que «prohíba de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria», para

acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

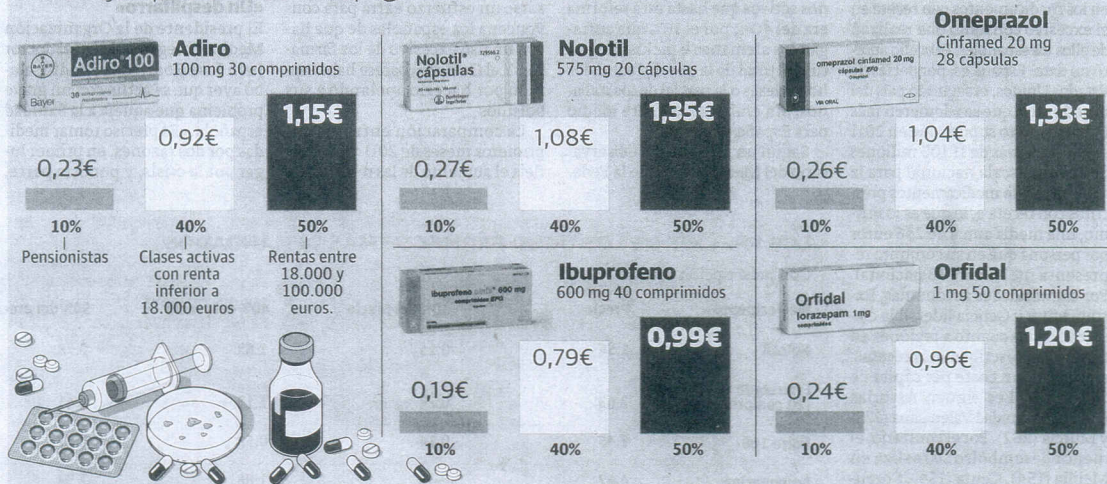
«Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles», afirmó.

De este modo, añadió, se pretenden «acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España». En concreto, calcula que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

Quién y cuánto pagará por los medicamentos



Cinco ejemplos del nuevo copago



tas paguen o que las empresas farmacéuticas tengan menos beneficios, nos quedamos con lo segundo», subrayó. En los mismos términos se manifestó la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, quien alertó de que muchas de estas medidas son la «antesala» para, posteriormente, provocar el «desmantelamiento del sistema nacional de salud».

El consejero del País Vasco, Rafael Bengoa, afirmó estar de acuerdo con el 80% de las actuaciones consensuadas, pero se mostró en desacuerdo con el «copago».

Algunos de los grupos contrarios se concentraron ayer frente a Sanidad, entre ellos la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, para denunciar «un segundo copago o repago».

Los sanitarios de la provincia dicen que hay otras medidas más eficaces

Advierten de que más pacientes dejan de comprar la medicación como ya ocurre

■ E. B.

ALICANTE. La mayoría de los profesionales sanitarios, representantes de instituciones colegiales, sociedades científicas y sindicatos rechazaron la implantación del copago farmacéutico, en lugar de otras medidas, ya que «en realidad es un repago», apuntaron.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, aseguró que se ha recurrido a «medidas con urgencia y ésta no es la vía porque perjudicará a los más vulnerables», es decir, «a los que tenemos unas 'nominitas' y que están controladas». En lugar de revisar el consumo, evitar la «supra medicación» y apostar por la concienciación y el cambio cultural, «se ha ido a lo más fácil y para esto no hace falta ser ministro».

Una opinión que comparten desde CC OO. Su secretario general de Comunicación en L'Alacanti, Salvador Roig, opinó que debido a la oleada de críticas que se produje-

ron a lo largo de la mañana han dejado exentos a los parados sin prestaciones. Ahora bien, aunque «han intentado maquillar la medida es un hachazo brutal».

Recordó que muchas familias actualmente están viviendo de la pensión de sus mayores, que «no consumen medicamentos porque quieran ellos sino porque se lo prescriben los médicos». «Es una injusticia», insistió Roig, quien recordó que entre el colectivo de parados que cobran alguna prestación hay muchos con menos de 500 euros. Además, el cambio de todas las tarjetas sanitarias supondrá un gran desembolso, a 3 euros de media.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Antonio Arroyo, no considera que el copago sea tan descabellado si es una medida a corto plazo y con límites según la renta. «Los que más tenemos, debemos aportar más y la solución a la crisis obliga a hacer sacrificios».

Por contra, para el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Francisco Cazorla, es un «castigo» y un «parche» y aboga por revisar el consumo de fármacos que se realiza, así como el de pacientes crónicos e históricos y evitar du-

REACCIONES

Belén Payá Pdta. del Colegio de Enfermería de Alicante

«Han ido a la vía más fácil y pagarán los más vulnerables»

Asegura que pagarán los «más vulnerables y los que tenemos nominitas controladas». A su juicio, «se ha ido a la vía más fácil» para recaudar.

Víctor Pedrera Atención Primaria del Sindicato Médico

«Habrá que penalizar antes el mal uso»

Considera urgente implantar medidas, pero lamenta que no se penalice a los pacientes que hacen un mal uso de la sanidad pública.

Francisco Cazorla Secretario Provincial del Satse

«Es un parche y una manera de castigar al enfermo»

También piensa que hay otras medidas antes de implantar el copago, que tilda de «parche y un castigo al enfermo».

Salvador Roig Secretario de Comunicación de cc oo

«El copago supone un hachazo brutal en la sanidad»

Afirma que es un «hachazo brutal» aunque se haya intentado «maquillar» la medida al excluir a los parados sin prestaciones.

Antonio Arroyo Pdte. Colegio de Médicos

«La solución a la crisis obliga a aceptar sacrificios»

A su juicio, aunque se trate de una medida impopular y a corto plazo, «hay que aceptar sacrificios» para hacer frente a la crisis.

Javier Blanquer Sociedad de Medicina Familiar

«Hay pacientes que están dejando de consumir»

En contra del copago sanitario, afirma que hay pacientes que están incumpliendo el tratamiento para no pagarlo.

plicidad de servicios, con «lo que ahorrarían mucho más». Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) recordaron que están en contra del copago sanitario y advirtieron de que ya hay pacientes en paro que han dejado de comprar medicinas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, señaló que «tendremos que acatar las órdenes», aunque «mi opinión personal es que se están cebando con sanidad y educación».

Para el responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico en la Comunitat (CESM-CV), Víctor Pedrera, se deben de tomar medidas porque el sistema es insostenible. Sin embargo, considera que hay otras actuaciones más eficaces como penalizar a aquellos pacientes que hacen un mal uso del sistema. Junto a la «complejidad» en su aplicación, Pedrera teme que pacientes puedan dejarse la medicación «como ya está ocurriendo».

Mientras, desde Esquerra Unida se pidió ayer al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que rechace el copago, ya que hace solo medio año el pleno de Les Corts aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada en la que se pedía el rechazo. El diputado socialista y portavoz de Sanidad en las Corts, Ignacio Subías, advirtió de que las medidas que el PP tiene previsto poner en marcha en Sanidad, «suponen el mayor ataque al Estado del Bienestar y al sistema sanitario público jamás conocido».